



INFORME DEL COMITÉ CENTRAL

I

Empezamos el año en un contexto político internacional definido por un incremento del desprecio al orden político mundial por parte de los Estados Unidos, consecuencia del primer año de la Presidencia Trump, definida por el que fuera el lema electoral del ahora Presidente, "American First", lo que ha supuesto un peligroso incremento de la unilateralidad política de la gran potencia en mayor desprecio de lo habitual de la Comunidad Internacional, las leyes internacionales y las instituciones multilaterales. El abandono de la UNESCO por parte de los EEUU, el anuncio de la unilateral reducción de la cuota que este país debe pagar a las NNUU y el reconocimiento unilateral – en contra de la legalidad internacional- de Jerusalén como capital del Estado de Israel, son muestras de una política imperial que comienza a causar problemas y desconfianzas incluso entre los más estrechos aliados de los EE.UU.

Vivimos en un contexto de inestabilidad política internacional y surgimiento de múltiples amenazas a la paz, entre las que destacan la escalada en el enfrentamiento de los Estados Unidos con la República Democrática Popular de Corea con el implícito riesgo de conflicto militar entre dos países provistos de armamento nuclear. EL PCE apuesta por la paz en el mundo y la resolución pacífica de conflictos, y uno de nuestros principales objetivos en nuestras relaciones internacionales debe ser el fortalecimiento de un amplio movimiento mundial por la paz. Por ello manifestamos que todos los Estados tienen la misma obligación de desnuclearizarse, no siendo admisible la existencia de un club de países nuclearizados que unilateralmente decida quienes tiene el derecho a tener armas nucleares, como así pretenden los EEUU.

La política de Trump tiene como resultado un paulatino aislamiento de Estados Unidos de las instituciones de cooperación y resolución de conflictos internacionales, incrementándose así un peligroso unilateralismo que trae como consecuencia el incremento del riesgo de conflictos internacionales.

La imprevisibilidad de la política exterior estadounidense –a fecha de hoy no existe un responsable de América Latina en el Departamento de Estado- no ha impedido el incremento de la intervención de este país en el continente que considera su patio trasero: continúan adelante con su decisión de construir un inmenso muro de la indignidad que separe México –o mejor dicho a los mexicanos pobres- de los EEUU, se amenaza con la expulsión de cerca de un

millón de inmigrantes latinos, se retrocede en la política de acercamiento comercial y político a Cuba mientras se mantiene el inmoral bloqueo a la isla, se incrementan las sanciones y agresiones económicas y políticas a la Venezuela y se auspician y consienten fraudes electorales evidentes con la finalidad de impedir la llegada al gobierno de fuerzas progresistas, como ha sido el caso en Honduras. Esta política agresiva de los EEUU hacia América Latina, inspirada en una nueva forma de golpismo en el que la desestabilización económica y la injerencia militar se combinan con la agresión mediática, va dando sus frutos reduciendo el número de gobiernos transformadores de amplia base popular. Continúa la inestabilidad política en Brasil donde avanzan las operaciones para impedir la presentación de Lula como candidato presidencial en la próxima cita electoral a la vez que por primera vez los EEUU consiguen instalar en la amazonia una cabeza de puente militar; se estrechan relaciones con el gobierno de neoliberal de Macri en Argentina; se sujeta al gobierno conservador del Perú impidiendo su caída a consecuencia de los escándalos de corrupción que implican al Presidente Kuczynski; se continúa la campaña de desestabilización de Ecuador y se estimula el regreso de la derecha más neoliberal al gobierno de Chile.

El PCE continuará dando todo el apoyo posible a los gobiernos de progreso y transformadores de Cuba, Venezuela y Bolivia, así como a todas aquellas fuerzas políticas que continúan trabajando por la construcción de poder popular en todo el continente. Los partidos hermanos latinoamericanos no dan por perdidas dos décadas de fortalecimiento de su soberanía y de un reparto más social de la riqueza. Desde el PCE seguiremos con atención los debates y acuerdos de espacios como el Foro de Sao Paulo.

Hacemos mención especial a la celebración del XIX Congreso del Partido Comunista chino que ha concluido con la aprobación de un exhaustivo plan de desarrollo de dos etapas, con base en el pensamiento socialista. El plan pretende acabar con la pobreza en el gigante asiático y reforzar las estructuras del Estado que deben garantizar el bienestar de una sociedad con 1.400 millones de habitantes. Saludamos los logros y esfuerzos del Partido Comunista chino y mostramos nuestra confianza en que alcance los objetivos marcados.

Nos felicitamos por los avances del pueblo sirio en detener la agresión terrorista sustentada por los Estados Unidos y la Unión Europea hasta prácticamente derrotarla y expresamos nuestra solidaridad con esta nación árabe a la vez que nuestra disposición a ayudar en la necesaria reconstrucción nacional. No olvidamos a Palestina, sometida a una imparable agresión que tiene como finalidad la desaparición del pueblo palestino y el establecimiento de un Gran Israel representante de los intereses occidentales en Oriente Medio. Exigimos la inmediata liberación de todas las presas y presos palestinos y en especial de la menor Ahed Tamimi, convertida en símbolo de la resistencia palestina contra el genocidio de todo un pueblo. En estos días en los que los órganos de justicia de la Unión Europea proclaman la absoluta ilegalidad del convenio de pesca entre Marruecos y la UE sobre la zona marítima económica del Sahara Occidental, proclamamos nuestro apoyo al pueblo y las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática y les reiteramos toda nuestra

solidaridad y compromiso con la causa de su independencia y soberanía nacional.

II

En este contexto, es obligación de la izquierda europea y en especial de los comunistas trabajar por construir la unidad de los pueblos de Europa, sobre la base de la soberanía nacional y la solidaridad, donde los pueblos sean el auténtico soberano que decida las políticas que más le benefician y donde las instituciones estén al servicio de las personas y no al servicio del gran capital. Desgraciadamente el Brexit, lejos de suponer un revulsivo para frenar al construcción de una Europa del Capital, está siendo entendido únicamente en clave de confrontación política y económica entre el Reino Unido y la Unión Europea, sin valorar las inquietudes de un importante sector popular británico que se ha visto agredido por una construcción europea que desatiende la solidaridad económica y social entre los pueblos. En coherencia con lo aprobado en el XX Congreso, desde el PCE debemos fortalecer nuestra presencia en todas las plataformas y coordinaciones de fuerzas progresistas interesadas en invertir la actual tendencia de construcción de una Europa dominada por el neoliberalismo y abrir el debate que nos permita mostrar alternativas claras para la unidad de los pueblos europeos. Tampoco podemos olvidar nuestra obligación de solidaridad con los cientos de miles de refugiados muchas de ellas mujeres y menores con altas probabilidades de acabar siendo víctimas de las redes de trata para la explotación sexual y la esclavitud laboral, que abandonan países empobrecidos o destrozados por conflictos instigados por las potencias neo coloniales para mayor beneficio económico del gran capital. Los y las comunistas de España hemos conocido el exilio y la solidaridad de otros pueblos de acogida con nuestra lucha y por ello reivindicamos con más énfasis que la Unión Europea y España cumplan con sus compromisos internacionales de acogida digna a las personas perseguidas que llegan a nuestras fronteras.

No perdamos de vista el intento de la extrema derecha de erigirse en la principal fuerza crítica de la actual Unión Europea, aunque habitualmente escondiendo su verdadera naturaleza de fuerzas políticas afines a las élites económicas que no cuestionan las bases económicas profundamente desigualitarias de sus respectivos estados. Asistimos a un preocupante incremento constante del voto a la extrema derecha en los últimos procesos electorales en Francia o en Austria, donde la ultraderecha entra en el gobierno asumiendo los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, y en otros países europeos como Hungría o la República Checa. Frente a una extrema derecha que trata de capitalizar la oposición a la Europa del capital, los comunistas hemos de asumir el reto de presentar una alternativa económica, social y política que conecte con unas clases populares que han visto como se desmantelaban sus derechos sociales y laborales en el actual desarrollo del capitalismo europeo.

III

Nos preocupa también la hegemonía de la derecha en Cataluña, como claramente se ha reflejado en los resultados de la última convocatoria

electoral del 21 D, con un fuerte voto a Ciudadanos en barrios obreros de Barcelona y Tarragona (35-40% de apoyo a Ciudadanos) así como en los barrios ricos de Barcelona. No olvidamos que Ciudadanos y el PDECAT practican las mismas políticas neoliberales y ambos fuerzas son expresión de una derecha nacionalista –española o catalana- que forma parte de la Internacional Liberal.

El resultado de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el 21 de diciembre no ha variado sustancialmente el panorama político en este territorio. Las fuerzas políticas que hasta ahora han defendido el proceso unilateral de constitución de una República catalana independiente obtienen una representación parlamentaria muy similar a las fuerzas políticas que defienden el mantenimiento de Cataluña en la España de la ya agotada Constitución de 1978. Tras tres años de graves enfrentamientos y polarización entre ambos bloques en Cataluña, la situación de empate político pone de manifiesto la necesidad de abandonar tanto la vía de la unilateralidad independentista seguida por el nacionalismo catalán como la del inmovilismo político del nacionalismo español, poniendo en marcha un nuevo proceso político en Cataluña y en todo el Estado que ponga el énfasis en la confrontación contra el modelo económico, político y social que ha permitido la aplicación de las políticas neoliberales que vienen acabando con los derechos civiles, económicos y sociales de la mayoría del pueblo español. Nuestra apuesta es por una República federal, y que para nosotros República no es solo la ausencia de un monarca, sino reparto de la riqueza, mayor participación política, democracia deliberativa, más derechos sociales, plena igualdad entre hombres y mujeres, ecología, etc. Esta es la orientación de nuestro trabajo en reivindicación de un modelo de Estado republicano y debe ser la propuesta política que el PCE ponga en común con el resto de organizaciones sociales y políticas que trabajan por los mismos objetivos.

El PCE ha considerado un grave error definir las alianzas y programas políticos y electorales en Cataluña exclusivamente en torno al conflicto entre nacionalismo y unionismo, porque ello obvia las verdaderas causas y políticas que conculcan tanto los derechos del pueblo catalán -incluidos sus evidentes derechos nacionales- como los del resto de pueblos de España.

La confrontación entre nacionalismos ha sido instigada tanto por la derecha nacional catalana -PDCat- como por la derecha nacionalista española -PP y Ciudadanos-, conscientes de que agitar la política catalana -y por extensión la del resto del país- sobre la confrontación entre identidades, excluye del debate en toda España los verdaderos problemas de la sociedad: la falta y precarización del empleo, los sistemáticos y continuados recortes en derechos sociales y económicos, la degradación de los servicios públicos universales, los recortes en las libertades públicas, el aumento de la desigualdad de género y la violencia machista y la generalización de las prácticas corruptas de saqueo del patrimonio público. Los anteriores problemas se padecen tanto en Cataluña como en el resto del Estado, y en uno y otro caso los responsables han sido las mismas fuerzas políticas conservadoras -PDCat, PP y su alter ego Ciudadanos- que hoy han conseguido que las víctimas de sus políticas económicas y sociales confronten entre ellos por el color de sus banderas.

Los resultados electorales muestran que el bloque defensor de la aplicación del artículo 155 -Ciudadanos, PSC y PP- ha quedado muy lejos tanto de ser alternativa de Gobierno como de ser mayoría social en Cataluña. El independentismo -PDCat, ERC y CUP-, a pesar de las dificultades arrastradas a consecuencia de las medidas autoritarias adoptadas por el Gobierno del PP para combatir una realidad eminentemente política, se mantiene y consigue la mayoría suficiente de escaños para gobernar Cataluña. Pero no avanza un ápice en conseguir la mayoría social y política independentista que necesitaba para legitimarse y en su caso continuar la vía unilateral que tan trágicamente ha venido impulsando hasta ahora. Todo ello se ve distorsionado por la judicialización por el Gobierno de Rajoy del problema político catalán, judicialización que va a dificultar, si no impedir, que la voluntad política del pueblo catalán expresada en las urnas pudiera dar lugar al inicio del fin de la confrontación nacionalista e iniciar una nueva fase de diálogo para avanzar en la resolución bilateral de la cuestión nacional catalana

El espacio político donde el PCE y el PSUC viu se referencian en Catalunya -En Comú Podem- obtiene más de 320 mil sufragios y 8 diputados/as, en un entorno marcado por el enfrentamiento identitario en el que únicamente esta fuerza política ha trabajado por romper esa dinámica, habiéndose convertido por ello en el blanco de las críticas de ambos bloques nacionalista. No es el buen resultado que sin duda necesitaba esta opción de izquierdas y de diálogo y coherencia política. Pero sobre todo no es el resultado que necesitaba Cataluña para romper la dinámica estéril de enfrentamiento en que se encuentra y por ello no es un resultado satisfactorio. El PCE coincide con el análisis realizado por los portavoces de En Comú-Podem incidiendo en la prioridad de construir estrategias que permitan desarrollar los procesos de confluencia política sobre el eje de confrontación entre capital y trabajo y así incrementar el apoyo popular a los Comunes entre los sectores más populares de Cataluña, objetivo al que dedicaremos todo nuestro esfuerzo tras analizar detenidamente los errores cometidos.

El PCE entiende que es fundamental una mayor presencia e implicación de las distintas expresiones de organización de la clase obrera en el nuevo espacio que representa el proyecto de En Comú-Podem, y en especial del sindicalismo organizado, cuestión indispensable para avanzar en un proyecto que necesariamente ha de ser Nacional y de Clase. Cataluña es fundamental en nuestro proyecto de construir unidad popular haciendo converger a la izquierda anti neoliberal de Cataluña con todos los sectores de la sociedad que están objetivamente interesados en construir alternativas al capitalismo así como en avanzar en un nuevo proceso constituyente para un nuevo país donde la solidaridad y la justicia social sean realmente mandatos constitucionales. Un nuevo país más incluyente en el que quepan todas las personas que aspiran a construir un mundo más justo, un país en el que los sentimientos nacionales no dividan al pueblo sino que lo cohesionen en torno al proyecto común de socialismo y libertad que siempre hemos defendido.

Desde nuestro punto de vista, la agudización del conflicto en Cataluña ha servido para provocar una ola nacionalista española de carácter claramente conservador que ha traído como consecuencia una aceleración del proceso de recuperación del Régimen del 78 con el fortalecimiento de las fuerzas

conservadoras, en especial de Ciudadanos, la fuerza que ya se configura como clara alternativa del Ibex 35 a un PP cada vez más desgastado por la corrupción y su nefasta gestión de Gobierno. También ha provocado un fortalecimiento de la ultraderecha fascista, o al menos mayor capacidad de intervención pública de esta, utilizando el discurso nacionalista español y la situación de confrontación con el nacionalismo catalán para intentar crear una base social de extracción popular mediante expresiones de violencia que son conniventemente toleradas por el Gobierno.

Finalmente no podemos perder de vista que el Estado ha renegado de desactivar el conflicto independentista utilizando vías políticas de diálogo. Por el contrario ha priorizado la represión policial y administrativa y la judicialización del conflicto catalán realizando una utilización desmesurada de las vías penales que ha provocado que en estos momentos en nuestro país existan presos políticos, esto es personas en prisión por la realización de una actividad política, es decir, no por la comisión de delitos comunes ni actuaciones violentas. Esta judicialización tendrá además consecuencias para toda la sociedad española y no solamente para Cataluña o para los independentistas, ya que se está poniendo en marcha toda una estrategia de criminalización de derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la protesta, a la disidencia y a la manifestación. Si esta peligrosa vía jurídica acaba imponiéndose, cualquier manifestación pública reivindicando opciones políticas no contempladas -que no prohibidas- por nuestra Constitución, por ejemplo, un modelo de Estado republicano o el rechazo al artículo 135 de la Constitución, en el caso de ser multitudinaria y considerarse "espectacular", podrá ser tenida como constitutiva de delito de Rebelión y sancionados sus organizadores y participantes con penas de hasta 25 años de cárcel. El derecho fundamental a la manifestación y a la protesta social comienza a ser considerado por los poderes públicos como un riesgo para la democracia. Expresamos toda nuestra solidaridad con el Coordinador de Esquerra Unida i Alternativa, el camarada Juan Josep Nuet, quien siendo el máximo representante de la organización hermana de Izquierda Unida en Cataluña, ha sido procesado y acusado de Rebelión, Sedición y otros delitos en un proceso judicial y se enfrenta a una posible condena de hasta 25 años de cárcel por su actividad como miembro de la Mesa del Parlament de Cataluña. Exigimos que la Fiscalía General del Estado retire de inmediato esta acusación y deje de criminalizar la legítima actividad política.

IV

Durante 2017 hemos continuado asistiendo al proceso de configuración del nuevo modelo político, económico y social surgido de la denominada crisis del régimen del 78 iniciada hace ya 10 años, con sus vertientes político-institucionales, económicas y sociales. Este proceso, claramente hegemonizado hasta ahora por la misma oligarquía político-económica que ha ostentado el poder en España de forma ininterrumpida desde la aprobación de la Constitución de 1978, no tiene como finalidad la profundización y desarrollo de los aspectos más sociales, redistributivos y democráticos que podrían haber emanado de la norma fundamental si los derechos en ella contemplados hubieran sido desarrollados con un espíritu solidario y de progreso. Por el contrario, tiene como finalidad consolidar y

expandir un modelo neo liberal que la oligarquía defiende como resultado de un determinado desarrollo de una Constitución que no contempla la obligación de las instituciones del Estado de garantizar el disfrute de todos los derechos económicos y sociales para todas las personas.

Las sucesivas reformas puestas en marcha por las fuerzas conservadoras -con el beneplácito o al menos la permisividad de la socialdemocracia- hace imposible volver a los objetivos trazados, al menos formalmente, en torno al amplio acuerdo político de los primeros años de la democracia española sobre la construcción de un Estado social y democrático de bienestar para todas las personas. Se dirige aceleradamente a la construcción de un modelo de mercados y de derechos desregulados, modelo caracterizado por altas tasas de desempleo, precariedad y desigualdad laboral, escaso nivel adquisitivo de los salarios reales, aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pérdida de inversiones públicas, reducción del sector público hasta su práctica desaparición, sobrecarga de las mujeres con dobles y triples jornadas por la falta de corresponsabilidad en los cuidados, privatizaciones de bienes, servicios y también derechos, reducción de las prestaciones públicas incluidas las pensiones y recortes de libertades públicas y derechos civiles.

El modelo, bajo las directrices político-económicas emanadas por los centros de poder real de la Unión Europea- no pretende otra cosa que la acumulación del mayor porcentaje posible de riqueza en las nuevas oligarquías, arrebatando a la mayoría social sus cada vez menores recursos y apropiándose del cada vez mas menguado patrimonio publico mediante privatizaciones y operaciones de despatrimonialización, utilizando para ello tanto medios legales como ilegales, como podemos comprobar a diario a la vista de la practica ya estructural de corrupción.

Los intentos populares de acabar con este modelo político y económico se frotalecieron a partir de 2010 como consecuencia de las desastrosas consecuencias de las anteriores políticas respecto a la gente joven, más preparada profesionalmente que anteriores generaciones pero sin embargo con menos perspectivas de futuro digno, provoco el estallido social del 15 M de 2011, dando lugar a una crisis de gobernabilidad como nunca se había conocido tras la muerte del dictador. Las contradicciones en el seno del sistema dieron lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas, unas con vocación rupturista y otras con la finalidad de asentar al régimen en crisis.

Todavía no están resueltas todas las contradicciones que llevaron al régimen del 78 a entrar en crisis, aunque tenemos que valorar como una realidad, que algunas de ellas si están prácticamente resueltas de una forma desfavorable para el pueblo trabajador. En todo caso, todavía no se han consolidado todos los cambios que darían lugar a un nuevo régimen o a la plena restauración del anterior, por lo que nos queda margen para intentar revertir la situación.

Hasta ahora, las clases populares y las fuerzas políticas que aspiramos a organizarlas y representarlas, no hemos sido capaces de ganar el pulso que entre 2011 y 2016 se libró entre las dos posibles salidas de la crisis de régimen que se plantearon y confrontaron de una forma directa, la que pretendía cambiar la fachada institucional, pero mantener la misma estructura

económica en favor de la clase dominante y la que pretendía una transformación económica y social en beneficio de la clase obrera, de las capas populares, es decir quienes planteábamos una salida de la crisis en favor de la gran mayoría social. No hemos sido capaces de construir una mayoría política alternativa representativa de los sectores populares que son mayoría social y que han padecido las consecuencias del ajuste neoliberal. No hemos sido capaces de alcanzar el gobierno del Estado.

El resultado final del ciclo social, político e institucional de 2011-2016 fue de empate, de bloqueo, pues tras un periodo de movilizaciones segundo del ciclo institucional el resultado fue que por una parte las fuerzas del Cambio ganaron posiciones pero no consiguieron la fuerza suficiente para alcanzar el Gobierno del Estado, pero por otra parte la composición de los Ayuntamientos, y del Congreso de los Diputados dificultaba mucho la consolidación de las reformas y recortes que tanto el PSOE como el PP habían realizado desde 2010, cuestión básica que necesitaba el Capital para cerrar la crisis.

Sabemos que solo podremos revertir la situación si conseguimos articular una salida democrática, social, solidaria de la crisis, si conjugamos la presión social con la acción institucional, porque en el ciclo anterior hemos visto como han estado disociadas estas dos cuestiones. En el momento de mayor presión social, esta se estrellaba contra el muro de la mayoría absoluta del PP, lo que provocaba desánimo y agotamiento, mientras que cuando se la pueden empezar a quitar las mayorías absolutas al PP en las elecciones municipales, nos encontramos que se frena el periodo de movilización social y la tensión de la calle se traslada de manera fundamental al esfuerzo electoral, y cuando se consigue un Parlamento fragmentado, nos encontramos con el momento de menos tensión social de la década, por lo tanto tenemos que superar dinámicas que manifiesten contradicción entre activismo social y acción institucional como si fueran dos cuestiones antagónicas. Necesariamente deben ser dinámicas posibles de sintetizar.

La crisis de régimen sigue abierta, aunque está más cerca que nunca de cerrarse en perjuicio del pueblo trabajador, de la clase obrera, de las capas populares. Nuestro objetivo inmediato es tratar de que esta crisis se cierre con el inicio de un proceso que invierta el actual de consolidación del neoliberalismo, poniendo en marcha la construcción de un modelo social, político y económico alternativo favorable a las grandes mayorías, avanzando así en la todavía lejana perspectiva de garantizar todos los derechos contemplados en la declaración universal de los derechos humanos para todas las personas, lo que no es otra cosa que la construcción del socialismo.

En estos momentos no cabe duda de que no tenemos la fuerza social y política necesaria para alcanzar los anteriores objetivos, por lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en evitar que se cierre la crisis en beneficio de la clase dominante, y para ello es fundamental determinar las contradicciones que tiene el sistema y actuar sobre ellas, con lo que en este momento cobra una importancia fundamental la táctica con la que tratemos de desarrollar nuestra estrategia.

Creemos que la estrategia rupturista que hemos defendido desde hace años, como la vía para conseguir una salida de la crisis del llamado “Régimen del 78”, en favor de la mayoría social, sigue siendo válida, porque, cada vez es más evidente que el actual marco institucional, con una Constitución agotada, se muestra insuficiente para resolver los problemas que hoy tiene planteados la clase obrera y capas populares de toda España.

Por lo tanto, cada vez es más necesario que nunca, romper el actual marco institucional y plantear la necesidad de dotarnos de una nueva Constitución que permita la construcción de un Estado Democrático, igualitario y socialmente avanzado, que reconozca el carácter Plurinacional, multicultural y plurilingüístico del Estado, y sobre todo en el que las libertades públicas y los derechos sociales estén plenamente reconocidos y legalmente garantizados. Pero todo ello debe ir acompañado de un esfuerzo de explicación a toda la sociedad española, de forma que nuestro discurso y nuestras propuestas descendan sobre la realidad cotidiana de las personas y sea fácil de identificar en ellas medidas concretas que solucionen los problemas diarios de estas, especialmente de los más golpeados por los efectos de la crisis, lo que requiere incrementar nuestra intervención en los movimientos de defensa de los servicios públicos: sanidad, educación y pensiones. Nuestra acción política no puede descansar en un complejo discurso académico o técnico, así nuestros fundamentos ideológicos y programáticos sean sólidos y profundos. De nuestra capacidad de explicar y hacer llegar nuestras propuestas a todas las personas, especialmente a las más humildes, depende que seamos hegemónicos.

Esta estrategia de construcción de alternativa tiene que ser desarrollada de una forma colectiva, participativa y con una amplia base popular. Nuestro primer objetivo es evitar que se consolide la salida antisocial, autoritaria, patriarcal que lleva pretendiendo el bloque dominante desde las elecciones de 2015, bien en su forma reformista con el acuerdo PSOE-C's, ya sea, en su vía continuista como ha tratado Rajoy o en una síntesis de ambas como puede resultar tras las elecciones catalanas, si finalmente las fuerzas económicas del bloque dominante, obligan a Rajoy y al propio PP a empezar a pensar en cambios políticos y personales en favor una nueva fuerza que represente a los intereses del capital en España.

Este es el reto que tenemos que afrontar en los próximos meses, en el plano social, y en el institucional, porque es cada vez más evidente que el sistema está tratando de cerrar el actual ciclo político derrotando a las fuerzas que representan la voluntad de cambio, para así consolidar su opción neoliberal y erradicar por años cualquier posible alternativa al anterior modelo.

Al mismo tiempo, tenemos que tener claro que a pesar de que en la actual correlación de fuerzas sociales y políticas se hace difícil tener éxito a corto plazo respecto a una salida rupturista, ello no nos debe llevar, como ocurrió en otro momento de nuestra historia, al abandono de la estrategia de ruptura, sino que nos debe llevar a plantear una táctica adecuada que nos permita superar en buenas condiciones este momento de ofensiva reaccionaria, poder

acumular fuerzas a través del incremento de nuestra presencia en el conflicto social, y manteniendo abierto el horizonte de la ruptura.

Iniciamos así el trabajo que nos permita afrontar el próximo ciclo electoral en la perspectiva de avanzar posiciones, para lo cual debemos transformar el malestar de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en tensión social, y la tensión social en movilización. En dicha tarea, el papel del PCE del siglo XXI debe ser trascendental, consolidándose como el intelectual colectivo necesario para la generación de pensamiento alternativo y la definición de estrategias capaces de disputar realmente el poder a la oligarquía dominante, esto es, acertar con la aplicación de la teoría política leninista construida para posibilitar la hegemonía política de la clase trabajadora y su acceso al gobierno de las instituciones del Estado.

V

El PCE, como ha hecho a lo largo de toda su historia y como ha sido la constante del movimiento comunista internacional, continua apostando por una extensa política de alianzas que involucre a fuerzas política y sociales en la construcción de sujetos políticos alternativos capaces de alcanzar el Gobierno de las distintas instituciones del Estado. Esta política de alianzas hoy se concreta en las distintas convergencias o confluencias que seamos capaces de construir en torno a las siguientes ideas:

1º.- Las alianzas políticas y sociales de las y los comunistas no responden a una táctica coyuntural o a meras previsiones electorales, sino que son fruto de nuestro pensamiento estratégico y de la política aprobada en nuestro XX Congreso y anteriores. Se trata de unir acumulando fuerzas, en torno a programas, tanto a componentes rupturistas como componentes reformistas siempre que todos ellos estén comprometidos en poner en marcha medidas concretas que superen las políticas neoliberales antisociales y anti populares. Por ello incluir en nuestra agenda más allá de la confrontación electoral la construcción de unidad popular se hace prioritario en este momento de reflujo y necesaria acumulación de fuerzas.

2º.- Las convergencias deben ser creadas y fortalecidas en torno a la presencia activa de nuestra militancia en el conflicto social. La organización del conflicto nos acerca a otros actores a la vez que crea marcos de confianza reciproca con estos, lazos fortalecidos por la participación en luchas comunes, ayudando así a eliminar desconfianzas.

3º.- La apuesta estratégica por las convergencias y las alianzas políticas no dependen de contextos subjetivos o consideraciones emotivas de nuestra organización o de nuestra militancia, sino de las condiciones sociales, políticas y económicas objetivas en las que se encuentra nuestro pueblo. Por ello nuestra práctica política tiene que ser de unidad de acción, sin descalificaciones -por muy justificadas que puedan estar algunas veces-, que puedan dificultar nuestro objetivo. Mientras más intensa es la agresión del capital y las políticas de recortes de derechos y libertades, mas necesario es poner en marcha procesos de convergencia que permitan acumular fuerzas

para hacer real la alternativa. El interés de nuestro pueblo se antepone a cualquier otra consideración.

4°.- Los modelos de convergencias y alianzas necesariamente han de ser flexibles en cada territorio, adaptándose a la realidad política y a los actores existentes. A la vez, deben responder a una misma coherencia política emanada de nuestra política congresual. También en los ámbitos territoriales con menos población debemos esforzarnos por vincular a otros actores a los procesos de convergencia cuando estos existan y ello sea posible. La convergencia debe priorizar a posibles actores con mayor presencia territorial y en el conflicto, pero sin abandonar el trabajo con otros actores con menos presencia territorial o menos presencia en el conflicto. Nuestro trabajo político debe volcarse en evitar la exclusión de pequeños actores a consecuencia de vetos de actores más mayores, aunque siempre priorizando el resultado político que tenga mayor capacidad de convertirse en referente de amplios sectores de nuestro pueblo.

5°.- Durante la construcción de procesos de convergencias, los y las comunistas debemos esforzarnos por hacer de nexo de unión entre aquellos actores que teniendo condiciones, implantación y/o influencia en un determinado ámbito, a priori se excluyan entre sí unilateral o bilateralmente respecto a otro posible actor. Importante objetivo es trabajar por vincular a candidaturas de unidad popular ya existentes a procesos de construcción de convergencia en los que participemos junto a las fuerzas políticas que han formado parte del grupo parlamentario Unidos Podemos- En Común-En Marea. Para esa tarea, el PCE e IU se encuentra objetivamente en una posición política preferente que sin duda reforzará nuestra posición en el proceso resultante

6°.- El PCE, -por nuestra historia y práctica política acumuladas y por nuestra estructura- tenemos la obligación de constituirnos en elemento esencial de cohesión de los proyectos de convergencia y por tanto estamos en condiciones de hegemonizar muchos de ellos. Es imprescindible que el PCE aporte su experiencia y visión política en la construcción de procesos de convergencia en todos los niveles, en especial en aquellos espacios en donde se definen las grandes convergencias de ámbito estatal.

7°.- Nuestra apuesta por la Convergencia con Podemos es firme en tanto esta fuerza política es el principal coadyuvante de IU en los procesos de convergencia en todo el Estado. El fortalecimiento de nuestra convergencia con esta fuerza política es clave para la construcción de un nuevo sujeto político que trascienda la actual IU, tal y como se acordó en la XI Asamblea Federal. Hoy Unidos Podemos sigue siendo una alianza electoral. Lograr revertir ese proceso y convertirlo en una herramienta útil para desplegar las confluencias es paso previo para situarnos ante el embrión del bloque contra hegemónico. Ello nos obliga a simultáneamente trabajar con otros actores susceptibles de ser vinculados al proyecto común en cualquier ámbito territorial, superando actitudes de desconfianza entre Podemos e IU o entre Podemos y esos otros actores. No renunciaremos a vincular al proceso de convergencia entre IU y Podemos a otros actores susceptibles de incorporarse, al igual que no renunciamos a articular procesos de convergencia por el

hecho de que uno de los actores, así sea un actor con un peso político determinante, renuncie a participar en ellos en un primer momento.

8°.- Los procesos de convergencia deben articularse en torno a métodos participativos que hagan que todos los posibles actores y personas participantes se sientan cómodos, sin imponer en ningún caso formas de actuar anti democráticas propias de formas de hacer política incompatibles con el carácter transformador del PCE. La hegemonía se construye políticamente mediante la explicación de propuestas y la realización de actividad política, no mediante imposiciones.

9°.- Las fuerzas de la izquierda nacionalista son un componente esencial de la convergencia en el ámbito estatal y especialmente en los ámbitos territoriales donde existan y tengan implantación las primeras. La convergencia con estas fuerzas debe construirse sobre el respeto a un modelo de Estado Federal y solidario, algo a lo que en ningún caso podemos renunciar ni ocultar en los programas.

Finalmente, ante el nuevo ciclo político que se inicia es importante reforzar los procesos de convergencia política y social en perspectiva electoral también atendiendo a la más que previsible nueva operación del PSOE de absorción publicitada de distintos sectores y personas que en el pasado estuvieron vinculados al proyecto de Izquierda Unida, con el intento de debilitar el proceso de Convergencia en torno a Unidos Podemos y restarle protagonismo y credibilidad. También y con la misma finalidad es muy posible la publicitación por el PSOE de ilusorias alianzas con fuerzas de escasa o nula implantación, todo ello con el único objetivo de eclipsar los procesos de convergencia puestos en marcha desde los espacios representativa de la izquierda alternativa e intentar presentarse como el eje del más amplio espacio de unidad política frente al PP.

VI

Este es el primer pleno del CC que realizamos tras el XX Congreso del PCE, un Congreso que ha acordado los documentos que os hemos distribuido y que marcan unas líneas políticas y organizativas claras que en estos meses debemos concretar y contrastar con la realidad. Para ello, es fundamental que el conjunto de la militancia, nuestras amigas y simpatizantes conozcan nuestros acuerdos por lo que os proponemos iniciar una campaña de presentación de los documentos que llegue al conjunto de los núcleos de nuestra organización.

Para alcanzar éxitos políticos necesitamos que toda la militancia participe activamente en la organización del conflicto social, optimizando el funcionamiento de las estructuras y responsabilidades internas del PCE de forma que la mayor carga de trabajo de la militancia no sea el trabajo interno. En ello deberá trabajar el Área Interna de nuestro Partido en coordinación con el Área Externa y la Secretaría del Mundo del Trabajo, que desde ahora reciben el mandato de este Comité Central de incrementar nuestra presencia en el conflicto social y laboral. En esta línea de trabajo, recordemos entre nuestros inmediatos retos retomar el trabajo en el movimiento de las Marchas

de la Dignidad, el más amplio ámbito de encuentro de múltiples expresiones del conflicto social en nuestro país.

A su vez, el incremento de nuestra presencia en el conflicto debe tener como una de sus consecuencias el fortalecimiento de Izquierda Unida y el desarrollo de políticas de crecimiento de nuestra organización partidaria en torno a nuestra vinculación a los conflictos más agudos de nuestra sociedad. El PCE podrá así convertirse en el referente organizado de todos los comunistas de España, organizados partidariamente o no a fecha de hoy.

Hemos decidido en nuestro XX Congreso esperar a la finalización de los procesos congresuales que aún quedan por celebrar en los territorios para elegir las responsabilidades definitivas, la Secretaría General, la Comisión Política y el Secretariado. Hacemos un llamamiento a dichas organizaciones para que dicho proceso esté cerrado a finales de marzo y podamos poner a principios de abril a todo el partido a hacer realidad los acuerdos congresuales. Mientras tanto desde la Dirección Política Transitoria pondremos en marcha planes de trabajo específicos para estos meses poniendo el acento en la huelga y jornada de lucha por los derechos de las mujeres convocada para el próximo 8 de marzo, la jornada del 14 de abril y la preparación del primero de mayo, además de la concreción de los acuerdos organizativos y estatutarios y la preparación de la próxima fiesta del PCE. Además de poner en marcha los compromisos Congresuales de acordar en menos de seis meses un protocolo contra la violencia de género en el Partido y una propuesta sobre cuotas y finanzas.

Hemos tomado decisiones de especial transcendencia en lo organizativo y en nuestra definición ideológica que no pueden llevarnos una vez más a la frustración ni a caer en los mismos vicios y errores de décadas pasadas. La voluntad expresada por la militancia y concretada por las y los delegados ha quedado clara con respecto al tipo de partido que queremos, un partido con una dirección que actúa e interviene en la sociedad, que organiza el conflicto social y laboral y construye hegemonía y que lo hace de manera organizada aplicando los acuerdos del Congreso y de este Comité Central, el centralismo democrático debe aplicarse correctamente, de abajo arriba y de arriba abajo, y no cortocircuitarse en ninguna estructura intermedia. Deben pasar a la historia las franquicias y los reinos de taifas.

Este Comité Central debe funcionar como un órgano de dirección colectiva. Prepararemos un reglamento de funcionamiento que debatiremos en el próximo pleno. Todas/os nosotras/os tenemos la obligación de adscribirnos a un área de trabajo y ser la voz de la dirección del PCE allí donde nos encontremos.

Acabamos este informe mencionando dos compromisos ineludibles del PCE y de los y las comunistas de este país. El próximo 24 de enero se conmemora el 41 aniversario de la masacre que acabó con la vida de nuestros camaradas de Atocha, abogados y defensores de los derechos de los trabajadores. El PCE se compromete otro año más en honrar su memoria y su sacrificio por la democracia, la libertad y los derechos de la clase trabajadora y dar apoyo a cuantas actividades se organicen en esas fechas recordando a estos

camaradas. Y el próximo 21 de enero tendrá lugar en Madrid un gran acto en recuerdo de la vida, el trabajo y el ejemplo de nuestro camarada Marcelino Camacho, padre de las Comisiones Obreras y personificación del espíritu de lucha inquebrantable de la clase obrera española. Se dará así inicio a una serie de actividades que durante todo el año 2018 conmemorarán el centenario del nacimiento de nuestro insigne camarada. EL PCE establecerá entre sus prioridades de trabajo para el año 2018 la difusión de la vida y el trabajo de Marcelino y del resto de camaradas que sacrificaron su libertad y seguridad durante años por construir las Comisiones Obreras u otros sindicatos y por defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores durante la dictadura y durante el periodo democrático.

Madrid, 14 enero 2018